



**VIABILIDAD DEL PROGRAMA “COLOMBIA SOLAR” EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA GUAJIRA,
MAGDALENA, SUCRE, ARAUCA Y BOLÍVAR, CONFORME AL ARTÍCULO 11 DE LA RESOLUCIÓN 40159 DE
2026**

En atención a la reglamentación expedida por el Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución 40159 de 2026, resulta jurídicamente procedente analizar la viabilidad de la implementación del programa Colombia Solar, en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Sucre, Arauca y Bolívar, así como las razones normativas, técnicas y sociales que justifican la priorización de dichos territorios dentro de la política pública de transición energética adelantada por el Gobierno Nacional.

Desde el punto de vista constitucional, el programa encuentra un fundamento sólido en los principios esenciales del Estado Social de Derecho previstos en la Constitución Política de Colombia. En particular, los artículos 1 y 2 superiores establecen que las autoridades públicas tienen el deber de promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los derechos fundamentales y asegurar condiciones reales de igualdad para toda la población. Bajo ese contexto, el acceso eficiente y continuo al servicio público de energía eléctrica constituye un elemento indispensable para garantizar condiciones dignas de vida, especialmente en sectores históricamente afectados por la pobreza y la exclusión territorial.

De igual manera, el artículo 365 de la Constitución dispone que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que corresponde a este asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. En consecuencia, el Estado colombiano se encuentra plenamente facultado para desarrollar mecanismos alternativos de generación y acceso a la energía que permitan ampliar cobertura, reducir desigualdades y garantizar sostenibilidad ambiental. El programa Colombia Solar se enmarca precisamente dentro de dichos fines constitucionales al promover sistemas de autogeneración energética mediante fuentes renovables.

Asimismo, el artículo 334 constitucional autoriza la intervención del Estado en la economía con el propósito de racionalizar los servicios públicos, mejorar la calidad de vida de los habitantes y asegurar una distribución equitativa de los beneficios del desarrollo. Esta disposición legitima jurídicamente la adopción de políticas públicas dirigidas a fortalecer la transición energética y reducir las brechas existentes en materia de acceso al servicio eléctrico, especialmente en regiones con mayores niveles de vulnerabilidad social y económica.

En el ámbito legal, la ejecución del programa encuentra respaldo en la Ley 142 de 1994, la cual regula la prestación de los servicios públicos domiciliarios y reconoce la obligación estatal de garantizar cobertura, eficiencia y continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica. Del mismo modo, la Ley 143 de 1994 establece los principios rectores del sistema eléctrico colombiano

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180



y promueve el desarrollo de esquemas de generación que permitan atender de manera adecuada las necesidades energéticas del país.

Bajo ese marco normativo, el artículo 11 de la Resolución 40159 de 2026 establece criterios específicos de focalización y priorización territorial para la implementación del programa Colombia Solar. Tales criterios incluyen factores como pobreza multidimensional, vulnerabilidad socioeconómica, condiciones de prestación del servicio eléctrico, pobreza energética y potencial de radiación solar. Desde el punto de vista jurídico, estos criterios resultan razonables, proporcionales y ajustados a los principios constitucionales de igualdad material y justicia social, en la medida en que buscan dirigir los recursos públicos hacia las regiones con mayores necesidades estructurales.

En ese sentido, la priorización de los departamentos de La Guajira, Magdalena, Sucre, Arauca y Bolívar encuentra plena justificación técnica y jurídica. En primer lugar, estos territorios presentan altos índices de pobreza energética y dificultades históricas relacionadas con la prestación eficiente del servicio eléctrico. Particularmente en la región Caribe colombiana, las problemáticas asociadas a altas tarifas, fallas recurrentes en la infraestructura energética y limitaciones en la cobertura del servicio han generado condiciones de desigualdad que requieren medidas especiales de intervención estatal.

En el caso específico de La Guajira, resulta evidente la necesidad de priorización debido a que el departamento posee uno de los mayores niveles de radiación solar del país y del continente, circunstancia que convierte la energía solar en una alternativa técnicamente eficiente y económicamente viable. A ello se suma la existencia de amplias zonas rurales y comunidades no interconectadas que históricamente han enfrentado limitaciones en el acceso continuo al servicio de energía eléctrica. Bajo dichas condiciones, la implementación de sistemas solares de autogeneración constituye una respuesta adecuada y coherente con los principios de sostenibilidad y equidad territorial.

Por su parte, Magdalena, Sucre y Bolívar presentan condiciones similares relacionadas con altos costos tarifarios y necesidades de fortalecimiento de la infraestructura energética. La ejecución del programa en estos departamentos permitiría aliviar la carga económica de los hogares vulnerables, promover la democratización energética y mejorar las condiciones de acceso al servicio público en sectores históricamente afectados por deficiencias estructurales.

En relación con el departamento de Arauca, la priorización también se encuentra plenamente justificada debido a las dificultades de cobertura en zonas rurales dispersas y a la necesidad de implementar soluciones energéticas sostenibles en comunidades alejadas del Sistema Interconectado Nacional. En este contexto, la autogeneración solar representa una herramienta eficaz para garantizar acceso a energía limpia, estable y ambientalmente sostenible.

Debe señalarse además que la implementación del programa “Colombia Solar” responde a los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el Estado colombiano en materia de transición energética, sostenibilidad ambiental y mitigación del cambio climático. La promoción de

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180



fuentes renovables de energía constituye actualmente una obligación estratégica del Estado orientada a garantizar desarrollo sostenible, protección ambiental y reducción de emisiones contaminantes.

En consecuencia, este despacho considera que la ejecución del programa Colombia Solar en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Sucre, Arauca y Bolívar resulta plenamente viable desde el punto de vista constitucional y legal, toda vez que desarrolla los principios de igualdad material, eficiencia administrativa, sostenibilidad ambiental y justicia energética previstos en el ordenamiento jurídico colombiano. De igual forma, la priorización establecida en el artículo 11 de la Resolución 40159 de 2026 se encuentra debidamente sustentada en criterios objetivos relacionados con vulnerabilidad social, pobreza energética y potencial técnico para el aprovechamiento de energía solar, razones por las cuales dicha focalización territorial resulta legítima, necesaria y acorde con los fines esenciales del Estado.

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180